



GD-F-008 V.9

Página 1 de 5

RESOLUCIÓN No. SSPD - 20174010004715 DEL 08/03/2017

“Por la cual se resuelve un recurso de reposición”

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007 y en el artículo 2.3.5.1.2.1.5. del Decreto 1077 de 2015, en la Resolución No. SSPD 20111300032265 de 2011, la Ley 1437 de 2011 y,

CONSIDERANDO:

1. ANTECEDENTES

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) de conformidad con lo previsto en el Parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, mediante la cual “se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”, es la entidad competente para adelantar el proceso de certificación relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico (SGP-APSB) o de retirarla según sea el caso, a los distritos y municipios del país.

Que el artículo 2.3.5.1.2.1.5. del Decreto 1077 de 2015, estableció que “La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adelantará el proceso de certificación de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007.”

Que el Superintendente de Servicios Públicos mediante Resolución No. SSPD 20111300032265 del 21 de octubre de 2011, delegó en el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo entre otras funciones, la de expedir los actos administrativos mediante los cuales se decida sobre la certificación de municipios relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB a que se refiere el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, en concordancia con el Decreto 1077 de 2015; resolver los recursos que contra ellos se presenten y en general la de ejercer todas las actuaciones previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A.), para adelantar los procedimientos administrativos.

Que el Municipio de ANORÍ del Departamento de ANTIOQUIA, es de categoría 6 y fue prestador directo del servicio público de aseo al 31 de diciembre de 2015 y para obtener la certificación relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB, debía acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 2.3.5.1.2.1.6 y 2.3.5.1.2.1.7 del Decreto 1077 de 2015.

Que mediante Resolución No. SSPD 20164010054515 del 30 de septiembre de 2016, la SSPD decidió DESCERTIFICAR al Municipio de ANORÍ del Departamento de ANTIOQUIA, por no haber cumplido los siguientes requisitos previstos en el artículo 2.3.5.1.2.1.7 del Decreto 1077 de 2015, dada su condición de prestador directo de aseo y por haber sido descertificado para la vigencia 2014:

- “Cumplimiento de lo establecido en el artículo 6° de la Ley 142 de 1994”.

- “Reporte en el SUI del estudio de costos y tarifas en formato PDF, elaborado con posterioridad a la entrada en vigencia de las metodologías tarifarias para cada uno de los servicios públicos prestados”.



C014/5927



C014/5927

- "Reportar en el SUI formato Acto de Aprobación de Tarifas expedido con posterioridad a la expedición de las metodologías tarifarias vigentes para cada uno de los servicios públicos prestados".

- "Cumplimiento del 50% de la obligación de reportar tarifas aplicadas, facturación y Plan Único de Cuentas PUC en el SUI, de la vigencia a certificar".

La Resolución No. SSPD 20164010054515 del 30 de septiembre de 2016, se notificó personalmente al Municipio de ANORÍ el día 25 de octubre de 2016 tal y como se observa en el expediente.

Que el Municipio de ANORÍ, mediante el documento radicado bajo el número SSPD 20165290761812 del 8 de noviembre de 2016, interpuso oportunamente recurso de reposición contra la resolución de descertificación.

2. ARGUMENTOS DEL MUNICIPIO Y PRUEBAS APORTADAS CON EL RECURSO DE REPOSICIÓN

2.1. Como argumentos del recurso, se alegaron los siguientes por parte de la recurrente:

Manifiesta el recurrente que los requisitos adicionales para municipios y distritos que presten directamente los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, se verifican cada dos años.

En este sentido indica *"Si analizamos los aspectos en que ha dado como resultado NO CUMPLE, son aspectos que solo son verificables cada dos años (tal como lo establece el artículo transcrito), por ende, la decisión tomada no está acorde con la normativa vigente, ya que se están reduciendo los términos establecidos en la misma sin fundamento legal para la reducción del mismo"*.

También argumenta que *"el municipio oportunamente, acorde con información hallada por la actual administración, ingreso al SUI para cargar la información y nunca encontró formularios disponibles y si no existen estos mal podría endilgársele al municipio incumplimiento"*.

2.2. De los documentos aportados con el recurso de reposición.

Con el recurso de reposición se aportaron los siguientes documentos:

2.2.1. Resolución No. 20154010042695 del 30 de septiembre de 2015, por la cual se decide sobre la certificación relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB, correspondiente a la vigencia 2014.

2.2.2. 17 pantallazos del SUI.

Los anteriores documentos con su valor legal se incorporan al expediente.

3. ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS

Para determinar si le asiste razón a la parte recurrente, esta SSPD procederá a analizar los argumentos expuestos en el escrito de reposición, lo cual se efectuará de la siguiente manera:

Argumenta el recurrente que para los municipios que tengan la calidad de prestadores directos se verificarán los requisitos del artículo 2.3.5.1.2.1.7 cada dos años y que la decisión de descertificación no está acorde con la normativa vigente, ya que según él se están reduciendo los términos establecidos en la misma sin fundamento legal para ello.

Frente a tal reparo, sea lo primero efectuar algunas aclaraciones respecto del procedimiento de certificación llevado a cabo por esta Superintendencia para la vigencia 2015.

En cuanto a la normatividad establecida para el cumplimiento de los requisitos por parte de los municipios tenemos que el artículo 2.3.5.1.2.1.9, del Decreto 1077 de 2015, estipula los plazos que deberán cumplir los municipios y distritos sometidos al proceso de certificación en cumplimiento de los requisitos consagrados en los artículos 2.3.5.1.2.1.6 y 2.3.5.1.2.1.7.

Para la vigencia a certificar 2015, el mismo Decreto estableció como fecha límite de reporte al SUI, el 30 de abril de 2015 y la Resolución 0275 del 29 de abril de 2016 lo amplió hasta el 20 de mayo de 2016; por su parte el artículo 2.3.5.1.2.1.1.1, estipula la obligación de los municipios y distritos de reportar la información requerida para el proceso de certificación a través del Sistema Único de Información – SUI en los formularios y/o formatos que determine la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

De lo anterior tuvo conocimiento el municipio de Anorí, mediante el radicado No. 20164010081091 del 11 de febrero de 2016, por medio del cual se le informó al municipio sobre las obligaciones que le asistían a la administración municipal frente al cumplimiento de la normatividad establecida para el proceso de certificación, como lo muestra la siguiente imagen:

Señor(a)
NICOLAS GUILLERMO HERON ARANGO
 Alcalde(sa) Municipal
ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANORÍ
 Palacio Municipal
 ANORÍ - ANTIOQUIA

Asunto: Cumplimiento de obligaciones legales vigentes sobre los procesos de certificaciones y Directivas de la Procuraduría General de la Nación.

Respetado(a) Señor(a) Alcalde(sa):

En el marco de las competencias asignadas a esta Superintendencia, en cabeza del Grupo de Certificaciones e Información, en especial de las indicadas en el parágrafo del art. 4 de la Ley 1176 de 2007, en el artículo 16 del Decreto 416 de 2007 y en las disposiciones finales de las Directivas 015 de 2005 y 005 de 2008 de la Procuraduría General de la Nación, me permito informar las obligaciones de su administración, con el fin de cumplir con la normatividad del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.

1. CERTIFICACIÓN RELACIONADA CON LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO SGP-APSB:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1176 de 2007, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios es la entidad competente para adelantar el proceso de certificación o retirarla, según sea el caso, a los distritos y municipios para administrar los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico SGP – APSB y asegurar la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en su jurisdicción, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5º de la mencionada Ley 1176 de 2007.

En los artículos 2.3.5.1.2.1.6 y 2.3.5.1.2.1.7 del Decreto 1077 de 2015, el gobierno Nacional estableció los requisitos que su municipio/distrito deberá acreditar para obtener dicha certificación dependiendo de la calidad de prestador directo o no que ostentó al 31 de diciembre de 2015, de acuerdo con la información obtenida del Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos – RUPS y la información allegada y reportada en el SUI por los entes territoriales y prestadores en el SUI.

Para el proceso que se adelantará en la vigencia 2016 (respecto a la vigencia 2015), es necesario que tenga en cuenta que se debe acreditar el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 2.3.5.1.2.1.6 del Decreto 1077 de 2015. En el caso que ostente la calidad de prestador directo de los servicios públicos al 31 de diciembre de 2015 y se encuentre descertificado en el proceso que adelantó esta entidad en el 2015, respecto de la vigencia 2014, debe además acreditar el(los) requisito(s) incumplido(s) señalado(s) en el artículo 2.3.5.1.2.1.7 del mencionado decreto. El Grupo de Certificaciones e Información elaborará diagnósticos sobre el estado de la información que debe reportar al SUI relacionada con el proceso de certificación en mención, documento al que podrá acceder ingresando con el usuario y contraseña de la alcaldía al SUI, una vez la noticia que se publica en el banner del SUI, indique que dicho documento se encuentra actualizado.

Recuerde que el 2 de mayo de 2016 vence el plazo para acreditar el cumplimiento de los requisitos señalados en el Decreto 1077 de 2015.

El párrafo tercero del numeral primero del citado oficio, dejó claro qué obligaciones debía asumir la entidad territorial en el mencionado proceso de certificación así: *"En el caso que ostente la calidad de prestador directo de los servicios públicos al 31 de diciembre de 2015 y se encuentre descertificado en el proceso que adelantó esta entidad en el 2015, respecto de la vigencia 2014, debe además acreditar el(los) requisito(s) incumplido(s) señalado(s) en el artículo 2.3.5.1.2.1.7 del mencionado decreto"*. (Subrayado fuera del texto).

Lo anterior se desprende del artículo 2.3.5.1.2.1.7, el cual establece:

"(...) Requisitos adicionales para municipios y distritos que presten directamente los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo. Salvo lo dispuesto en el parágrafo primero del presente artículo, para los municipios y distritos que tengan la calidad de prestadores directos se verificará cada dos años, el cumplimiento de los requisitos que se establecen a continuación, adicionales a los establecidos en el artículo 2.3.5.1.2.1.6 del presente capítulo". (Subrayado fuera del texto).

PARÁGRAFO 1°. El municipio o distrito prestador directo que se encuentre descertificado por uno o varios de los aspectos del presente artículo, podrá obtener la certificación en la siguiente vigencia, acreditando, adicionalmente a los requisitos establecidos en el artículo 2.3.5.1.2.1.6 del presente capítulo, el cumplimiento del aspecto o aspectos incumplidos, de acuerdo con los requisitos exigidos en la vigencia a certificar. Lo anterior, sin perjuicio de la verificación que se realizará cada dos años de la totalidad de los requisitos para prestadores directos". (Subrayado fuera del texto).

Con base en lo dispuesto en la normas transcritas, no es de recibo el argumento del recurrente que pretenden darle una interpretación parcial y sin acierto al artículo 2.3.5.1.2.1.7, ya que la norma es clara al establecer que los municipios prestadores directos que hayan sido descertificados en la vigencia inmediatamente anterior (2014) deberán acreditar para la vigencia evaluada (2015), además de los requisitos del artículo 2.3.5.1.2.1.6, aquellos que fueron incumplidos respecto de su calidad de prestador directo.

Es de aclarar que la información fue dada a conocer anticipadamente, como lo evidencia la imagen que se adjunta y sobre la cual no hubo pronunciamiento por parte del municipio, lo que permite deducir que a la entidad territorial se le ofrecieron los mecanismos necesarios para que adelantara un proceso de certificación con todas las garantías que rigen la materia.

Asimismo, y a propósito de lo dicho por el recurrente en cuanto a que "el municipio oportunamente, acorde con información hallada por la actual administración, ingreso al SUI para cargar la información y nunca encontró formularios disponibles y si no existen estos, mal podría endilgársele al municipio incumplimiento", este Despacho se permite aclarar que la Resolución No. 20151300054195 del 15 de diciembre del 2015, por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución SSPD 20101300048765 del 14 de diciembre de 2010, respecto de la información a cargar en el Sistema Único de Información – SUI, por parte de las alcaldías municipales y distritales, dispone claramente en el anexo, que los documentos que se deben reportar en el Inspector "aplican de acuerdo a la condición de prestación directa o no de los servicios públicos domiciliarios registrado en el RUPS (...)". (Subraya fuera de texto).

Concretamente, para el asunto que nos ocupa, el municipio no se encuentra inscrito en el RUPS como prestador directo de aseo, motivo por el cual no se habilitaron los indicadores y formatos para dar cumplimiento a lo establecido en artículo 2.3.5.1.2.1.7, en este entendido la responsabilidad recae enteramente sobre el ente territorial, puesto que le corresponde a este último efectuar la inscripción en comento, de conformidad con la normativa vigente para que pueda ser efectivamente aprobada, situación que deja en evidencia el incumplimiento de las obligaciones a cargo del municipio y que de acuerdo a lo dicho en sus argumentos pretende trasladar a esta entidad, lo cual no es aceptable porque claramente son de competencia exclusiva de dicho municipio.

Por lo anterior y partiendo de que el proceso de certificación se rige por normas de tipo procesal y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 1564 de 2012 "Las normas procesales son de orden público y, por consiguiente de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley", se advierte que el municipio de Anorí no reportó la información prevista en el artículo 2.3.5.1.2.1.7 del Decreto 1077 de 2015, dada su condición de municipio prestador directo para la vigencia 2015.

Al respecto, la Corte Constitucional se ha pronunciado así¹:

"Pues bien, nótese cómo las leyes de estirpe procesal son de orden público y en consecuencia de obligatoria observancia. Sus dictados entonces, son ajenos al querer de los individuos: particulares y funcionarios llamados a aplicarlas", además advierte que: "(...) En efecto, ha de repetirse, que la condición de normas taxativas que caracteriza las leyes que rigen los procedimientos es de inexorable acatamiento, máxime cuando estas normas constituyen un presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del sistema normativo." y concluye señalando: "En este orden, los términos procesales se hacen tan imperativos que su cumplimiento, es una manifestación de uno de los principios sobre los cuales reposa el derecho procesal. Se trata del principio de la preclusión o de la eventualidad, el cual consiste en la clausura de las actividades que pueden llevarse a cabo dentro de cada etapa del proceso.

(...)Lo anterior, por cuanto el señalamiento de términos judiciales con un alcance perentorio no sólo preserva el principio de preclusión o eventualidad sino que, también, permite, en relación con las partes, asegurar la vigencia de los principios constitucionales de igualdad procesal y seguridad jurídica, ya que al imponerles a éstos la obligación de realizar los actos procesales en un determinado momento, so pena de que precluya su oportunidad, a más de

¹ Corte Constitucional. Sentencia T - 213 del 28 de febrero 2008. MP Doctor Jaime Araujo Rentería.

garantizar una debida contradicción, a su vez, permite otorgar certeza sobre el momento en que se consolidará una situación jurídica."

Así las cosas, se tiene que dentro del proceso de certificación adelantado por esta superintendencia se hace necesario que el municipio actúe con la diligencia requerida, frente a los requisitos que son objeto de revisión, lo cual no sucedió en este caso si se tiene en cuenta que no se llevaron a cabo las acciones necesarias para dar cumplimiento a las exigencias normativas.

De lo dicho podemos concluir que, el municipio de Anorí – Antioquia no cumplió con los requisitos relacionados en el artículo 2.3.5.1;2.1.7 del Decreto 1077 de 2015, por lo tanto el recurso formulado por el señor Nicolás Guillermo Herón Arañó, como representante legal del ente territorial no prospera y en consecuencia la resolución recurrida será confirmada.

En mérito de lo expuesto, el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución No. SSPD 20164010054515 del 30 de septiembre de 2016, proferida por el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR personalmente de la presente resolución al alcalde del Municipio de ANORÍ del Departamento de ANTIOQUIA, haciéndole entrega de una copia de la misma, y advirtiéndole que contra ésta no procede recurso alguno. De no ser posible la notificación personal, se debe dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

ARTÍCULO TERCERO.- COMUNICAR el contenido de la presente resolución al Gobernador del Departamento de ANTIOQUIA, al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

ARTÍCULO CUARTO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria y contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D. C.



JULIÁN DANIEL LÓPEZ MURCIA

Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Proyectó: Vanessa Benavides - Contratista Grupo de Certificaciones e Información

Revisó: María Eugenia Sierra Botero- Coordinadora Grupo de Certificaciones e Información

Aprobó: Carlos Andrés Bernal Casas – Abogado Contratista - Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Expediente: 2016401351601093E